



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifican disposiciones del proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, el cual quedará así:

Artículo 5º. Modifíquese el artículo 535 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedara así:

Artículo 535. Gratuidad. Los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios, sin sujeción a otras normas que las previstas en este título.

Las expensas que se causen dentro de dichos procedimientos deberán ser asumidas por la parte solicitante, de conformidad con lo previsto en las reglas generales del presente código.

En el evento en que las expensas no sean canceladas, se entenderá desistida la solicitud.

Son expensas causadas en dichos procedimientos, las relacionadas con comunicaciones, remisión de expedientes y demás gastos secretariales.

Parágrafo primero. Las expensas que se causen durante los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas, así como el cobro de servicios que puedan hacer los notarios, ~~los abogados conciliadores~~ y los centros de conciliación privados, y las demás expensas mencionadas en el presente artículo, serán asumidos con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME. También lo serán los

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

honorarios del liquidador, y los gastos en que este deba incurrir para el cumplimiento de sus funciones, a menos que en el inventario se cuente con dinero en efectivo que se pueda destinar a tales finalidades.

Para ello el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Justicia, establecerá el procedimiento para su pago, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Parágrafo segundo. A partir de la expedición de la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá treinta (30) días calendario para conformar una lista de auxiliares de justicia que deberán cumplir deberes de asistencia técnica en los procesos de insolvencia para personas naturales no comerciantes, en los que el deudor así lo solicite.

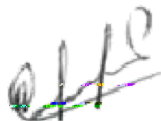
Las expensas de sus funciones deberán ser asumidas por el deudor; en caso de que éste no cuente con los recursos para el pago del auxiliar de la justicia las expensas estarán a cargo del FOME, de que trata el Decreto Legislativo 444 de 2020, hasta su liquidación. Una vez liquidado el FOME deberá el Ministerio de Justicia y del Derecho, disponer de recursos para el cubrimiento de estas expensas cuando el deudor no pueda asumirlas.

Al deudor se le deberá informar de la posibilidad de acceder a la asistencia técnica a la que se ha referencia en el presente artículo.

Cordialmente,

CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO

Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico



Oscar Dario Perez Pineda
Representante a la Cámara

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, que posterior a su radicación fue acumulado al Proyecto de Ley 64 de 2020 junto con el 114 de 2020 Cámara, introdujo la modificación en su artículo 3° al artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, estableciendo la posibilidad de que el deudor acuda a un abogado certificado como conciliador para que conozca directamente de los procedimientos de negociación de deudas.

En la Exposición de Motivos original se indicó que esta iniciativa tiene como finalidad principal entregar a las personas naturales no comerciantes, una mejoría en el proceso de insolvencia, disminuyendo su término de duración e incluyendo herramientas que permitan un trámite ágil e idóneo, tal y como lo prevé el Decreto Legislativo 560 de 2020 para las personas jurídicas.

En consecuencia, la motivación de las modificaciones introducidas son las de hacer más efectivo el proceso de insolvencia “disminuyendo” sus términos, y no tiene relación, para la eficiencia del trámite, permitir que se acuda a un abogado (que el deudor elija), para que conozca del procedimiento. Este mecanismo, además de los inconvenientes que tiene y que aquí se mencionan, no brinda celeridad al procedimiento. En efecto, hace necesario que, además de realizar el acuerdo de pago, posteriormente se avale por el Ministerio Público, por lo que realmente resultará más demorado, mucho más cuando no se establece un término para que otorgue el aval, ni el trámite a seguir en caso de negarse, teniendo en cuenta además la cantidad de funciones y actuaciones en las que estos funcionarios participan. Todo esto en detrimento de los intereses patrimoniales del deudor, quien verá encarecida su deuda por el paso del tiempo.

Adicionalmente, este mecanismo podría vulnerar el principio de transparencia y buena fe que debe guiar el trámite. En efecto, aún bajo el amparo de la normatividad actual, en donde se



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

establece cierto control sobre la persona que actúa como conciliadora, se han presentado situaciones indeseadas, por lo que no resulta conveniente la propuesta normativa sugerida.

Es de aclarar otorgar la atribución al Ministerio Público de avalar el acuerdo de pago producto de la negociación de deudas, implica otorgarle funciones que no le están asignadas constitucionalmente, puesto que el límite de estas se encuentra claramente determinado por el artículo 117 de la Carta.

No resulta claro tampoco cómo se realizará el análisis de los impedimentos o las recusaciones, que probablemente se presentarán, y tampoco está definido el costo que tendrá el citado funcionario, asuntos que no se desarrollan en el texto normativo y tampoco se someten a la reglamentación de gobierno.

Al introducir esta competencia, se pierde el principio de independencia de quien guía el trámite, por cuanto el deudor es el que va a contratar al abogado conciliador, razón por la cual no existiría un tercero neutral.

Finalmente, si lo que se pretende es llegar a algunas zonas en donde no se encuentren centros de conciliación habilitados por el Ministerio de Justicia y el Derecho, se sugiere establecer la posibilidad de que el Gobierno Nacional, se apoye en las Alcaldías Municipales o Cámaras de Comercio para que dentro de su planta de personal estas entidades cuenten con el servicio de un abogado conciliador debidamente certificado y capacitado en insolvencia, para que sea esta persona quien se encargue de impulsar el trámite de negociación de deudas, garantizando así el acceso a la justicia, el principio de imparcialidad y el debido proceso.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym